

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO V

ACTUACIONES N°: 1053/19



H103054196835

JUICIO: CONDORI JUAN ELADIO c/ JEWELLS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.-
Expte. 1053/19

San Miguel de Tucumán, 29 de diciembre de 2022

AUTOS Y VISTO: Vienen a conocimiento para el dictado de sentencia definitiva los autos caratulados: "Condori Juan Eladio c/ Jewells S.R.L. s/ cobro de pesos"- Expte. N.º 1053/19, de los que,

RESULTA:

Mediante presentación del 16/08/19 se apersonó la letrada Vanesa Cristina Rasguido, como apoderado de Juan Eladio Condori, DNI nro. 33.702.900, con domicilio en calle 12 de Octubre, Colonia N.º 9, Departamento de Cruz Alta, conforme lo acreditó con poder ad litem. En tal carácter interpuso demanda en contra de la firma Jewells SRL, CUIT nro. 30-69716687-0, con domicilio en calle Amadeo Jacques nro. 1.282 de esta ciudad, por la suma total de \$975.527,13; con más los intereses, costas y gastos, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, vacaciones proporcionales no gozadas de 2018, SAC 1er semestre y proporcional 2do semestre de 2018, diferencias salariales de los últimos 24 meses, multas de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323, multa del art. 80 de la ley de contrato de trabajo (en adelante LCT) y multas artículos 8 al 15 de la ley 24.013.

Solicitó el apartamiento de la tasa pasiva con la fórmula del Banco Central y planteó la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, modificados por el art. 4 de la ley 25.561 y el art. 5 del Decreto N.º 214/02 que prohíbe la indexación de créditos solicitando su actualización conforme el índice del costo de vida.

En cumplimiento del art. 55 del CPL, relató que su mandante ingresó a prestar servicios bajo las órdenes de la demandada en 15/11/11, en el establecimiento ubicado en calle Amadeo Jacques nro. 1.282, bajo las órdenes de Matías Rinsdahl, (socio gerente de la firma), Pablo Rinsdahl (padre del socio gerente y a quien el personal lo reconoce como titular o dueño de la empresa) y bajo la supervisión del Sr. Darío Sánchez (encargado), hasta que se dio por despedido en forma indirecta en 27/07/18.

Explicó que la firma accionada tiene contratos con los ingenios El Tabacal y Concepción, quienes les mandan el azúcar para que la empresa demandada haga el fraccionamiento, a través de la empresa Transporte Gómez, y una vez fraccionada el azúcar también esta empresa y otras se encargaban de su traslado. Indicó que la firma accionada fraccionada tres marcas de azúcar "Chango – azúcar común", "Chango Premium – azúcar refinada y más blanca" y "Sol Tucumano".

Detalló que el actor cumplía funciones de "embolsador", "estibador" y "bolseador de bolsas de azúcar" de 50 kg, con una jornada completa de

lunes a viernes, de 8 a 13 h y de 15 a 22 h, y los días sábados de 8 a 15 h, por las cuales percibió una remuneración de \$4.000 por semana, todo ello sin que se le efectuaran aportes previsionales ni de obra social, vacaciones, aguinaldo, horas extras, etc., es decir, estuvo trabajando sin registración. Agregó que nunca recibió capacitación ni perfeccionamiento.

Sobre el distracto, expuso que como consecuencia de un accidente de tránsito inculpable ocurrido en la madrugada del 08/10/17, el actor sufrió la lesión de una rodilla con diagnóstico de rotura de ligamentos y menisco que no le permitió seguir asistiendo a su puesto de trabajo durante aproximadamente dos meses, pero como no contaba con obra social, no pudo operarse su rodilla.

Afirmó que durante ese periodo percibió su salario “en forma retaceada”, pero por “estricta necesidad alimentaria” y sin haberse recuperado, el actor debió volver a prestar servicios en condiciones de precariedad, en fraude laboral, previsional y fiscal; todo ello hasta que en los primeros días de julio de 2018 se le impidió el ingreso al lugar de trabajo.

Ante esta situación remitió telegrama en 10/07/18 solicitando que se aclare su situación laboral y se lo proceda a registrar acorde a sus reales condiciones laborales, le abonen diferencias salariales, todo ello bajo apercibimiento, en caso de silencio o negativa de considerarse injuriado y despedido por exclusiva culpa patronal.

Refirió que ante el rechazo de la accionada mediante carta documento del 18/07/18, el actor hizo efectivo el apercibimiento y se dio por despedido en forma indirecta mediante telegrama impuesto en 26/07/18.

Practicó planilla de rubros reclamados conforme la categoría profesional de “personal de maestranza B” según el art. 5 del CCT 130/75. Mencionó el derecho en que sustenta su pretensión. Solicitó que se haga entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de aportes. Hizo reserva de plantear el caso federal. Ofreció prueba documental y documental en poder de terceros.

Corrido traslado de la demanda, en 30/03/21 se apersonó Matías Andrés Rinsdahl Canavosio, DNI nro. 18.811.964, en carácter de socio gerente de Jewells SRL, CUIT nro. 30-69716687-0, con domicilio en Amadeo Jaques nro. 1.282 de esta ciudad, con el patrocinio letrado de Máximo Alberto Ibazeta. (MP 4767).

Opuso defensa de falta de legitimación pasiva y falta de acción debido a que afirmó que no existió relación laboral o de ninguna otra naturaleza con el actor, por lo que, al no haber sido empleador del Sr. Condori no debe responder ante su reclamo.

Planteó defensa de prescripción liberatoria en contra de los rubros reclamados por el actor en el escrito de demanda, afirmando que transcurrió el plazo de dos años previsto en el art. 256 de la LCT.

Subsidiariamente contestó demanda, efectuó una negativa general y particular de los hechos descriptos por el actor y negó la autenticidad de las fotografías adjuntadas, de las bolsas/envases de azúcar, acompañados como documental por la parte actora.

Sostuvo que el actor pretende acreditar el vínculo laboral amparándose en instrumentos sobre los cuales su parte desconoce la autenticidad y pretendiendo cobrar una suma de dinero sin haber prestado servicios para la firma Jewells SRL.

Destacó que, algunos de los instrumentos adjuntados por el actor provienen de un “espionaje industrial” y/o un “robo hormiga” ya que, en caso de demostrarse que los envases de azúcar de un kilo acompañados por el accionante hubieran salido de la sede la empresa, la persona que los habría retirado, lo habría hecho sin autorización, configurando el delito de hurto.

Rechazó la indemnización de la ley 24.013 y acompañó prueba documental.

En presentación del 22/10/21 se apersonó el letrado Matías Balardini, como apoderado de la firma Jewells SRL, conforme copia de poder general para juicios que acompañó a dicha presentación.

Abierta la causa a pruebas, en 04/11/21 se celebró de manera remota la audiencia prevista en el art. 69 del CPL (conforme lo dispuesto por acordadas N.º 226/20, 342/20, 745/20 y 820/20 de la CSJT), en la que al haber comparecido únicamente la parte actora, se tuvo por fracasada la instancia conciliatoria.

Concluido el período probatorio, en 15/06/22 Secretaría Actuarial informó sobre la producción de pruebas, del cual resulta que la parte actora ofreció: A1) Documental: producida; A2) Informativa: producida; A3) Confesional: producida; A4) Exhibición de documentación: producida; A5) Testimonial: producida; A6) Testimonial con reconocimiento: no producida; y A7) Inspección ocular: producida. Por su parte, la accionada no ofreció pruebas.

Presentado en forma oportuna únicamente el alegato de la parte actora, en 19/09/22, el Ministerio Fiscal se pronunció sobre los planteos de inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora.

Por proveído del 19/09/22 se ordenó pasar los presentes autos a despacho para resolver, el que, notificado a las partes, dejó la causa en condiciones de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

I.- Las cuestiones controvertidas a dilucidar y de justificación necesaria, conforme al artículo 265, inc. 5, del CPCC, son las siguientes: 1) Existencia de un contrato de trabajo entre los litigantes y, en su caso, sus extremos. Falta de legitimación pasiva. 2) En su caso, causa y justificación del distracto. 3) Procedencia o no de los rubros e importes reclamados. 4) Intereses. Inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Costas. Planilla. Honorarios.

Primera cuestión: Existencia de un contrato de trabajo entre los litigantes y, en su caso, sus extremos. Falta de legitimación pasiva y de acción.

I.- Como se expuso en el capítulo de las resultas, la parte actora afirmó que el Sr. Condori se desempeñó en favor de la firma Jewells SRL desde el 15/11/11, en el establecimiento ubicado en calle Amadeo Jacques nro. 1.282 de esta ciudad, donde cumplía funciones de “embolsador”, “estibador” y “bolseador de bolsas de azúcar de 50kg”, todo ello sin estar registrado.

Sostuvo que cumplía con una jornada de 8 a 13 h y de 15 a 22 h de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 15 h, con una remuneración semanal de \$4.000. Indicó que la accionada no le efectuaba los aportes previsionales, ni de obra social, vacaciones, aguinaldo, ni por horas extras.

Por su parte, la accionada negó haber mantenido vínculo

alguno con el actor, por lo que interpuso las defensas de falta de legitimación pasiva y de acción.

Afirmó que el carácter de responsable debe atribuirse a quien ocupa la posición de empleador y solo este debe responder frente al trabajador.

II.- Conforme quedó planteada la cuestión, corresponde proceder al análisis de las pruebas pertinentes y atendibles para resolverla, recordando que por el principio o juicio de relevancia puede el sentenciante considerar solo aquellas pruebas que entienda tengan importancia para la solución del litigio.

1.- De la prueba instrumental ofrecida por el actor resultan:

1.1.- Cuatro fotografías en donde se observa al Sr. Condori juntos a otras personas, que la parte actora afirmó que son Rubén Núñez, Franco Díaz, Roque Arroyo y Matías Medina.

Se destaca que en la fotografía nro. 2, no se logra identificar los rostros de las personas que aparecen, pero si se observan fardos que podrían ser de azúcar.

1.2.- Bolsa vacía con logo de “Sol Tucumano”, con la leyenda en su reverso de “fraccionada por Jewells SRL”

1.3.- Copia de una nota de página web “Portal Caña noticias del mundo cañero”, dominio <https://www.portalcania.com.ar>, que titula “Jewells: una empresa familiar con más de 30 años en el mercado tucumano”.

1.4.- Copia de escala salarial de FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) para la categoría de maestranza en el periodo abril a julio de 2018.

2.- Del intercambio epistolar, el cual se tiene por autentico en virtud de que fue ofrecido como documental por ambas partes resultan y sobre el cual informó el correo oficial, surgen los telegramas de fechas 10/07/18, 26/07/18 y 30/07/19 y las cartas documentos de fechas 13/07/18 y 01/08/19.

De estas misivas resulta que en 10/08/18 el actor intimó a la accionada a registrarlo de acuerdo a sus condiciones laborales, sobre las que detalló: fecha de ingreso en 15/11/11, funciones de embolsador, estibador y bolseador de bolsas de azúcar de 50 kg, con jornada de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 15 a 22 h, y los sábados de 9 a 15 h, con una remuneración semanal de \$4000. Estos extremos fueron negados por la accionada mediante misiva del 13/07/18, negando la existencia de una relación laboral.

3.- De la prueba informativa ofrecida por la parte actora, resultan:

3.1.- Informe de AFIP, resulta la nómina de empleados de la firma Jewells SRL por número de CUIT, entre los que se encuentran 20141352823, 20188119647, 20210269267, 20233342530, 20249830470, 20255204670, 20263786581, 20287917296, 20288774073, 20324091409, 20328275067, 20332371976, 23117960129, 23231986359 y 23362317789.

Cabe señalar que ninguno de estos números se corresponde con el DNI del actor (33.702.900).

3.2.- Informe de la Dirección General de Rentas en el que consta que la firma accionada se encuentra registrada con la actividad “fraccionamiento de producción de terceros”.

3.3.- Informe del SEOC Seccional Tucumán, en el cual remitió copia fiel de escala vigente para empleados de comercio según el CCT 130/1975.

4.- De la prueba confesional ofrecida por la parte actora, resulta que citado el representante legal de Jewells SRL, este no compareció a la audiencia fijada para el 22/04/22, por lo que se dispuso a tener presente para su valoración en definitiva al apercibimiento dispuesto por el art. 325 del CPCyC.

Del pliego acompañado, surgen como relevantes las posiciones nro. 8 (que el actor prestó servicios para Jewells desde el 15/11/11), nro. 9 (que el actor realizaba tareas de embolsador, estibador y bolseador de bolsas de azúcar de 50 kg); nro. 11 (que el actor se desempeñó en jornada completa, de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 13:00 y de 15:00 hasta las 22:00 hs y los días sábados desde las 8:00 hasta las 15:00 hs); nro. 15 (que abonaba al actor una remuneración de \$4.000 semanales); nro. 17 (que el actor estuvo de licencia médica por lesión en su rodilla debido a un accidente de tránsito en octubre de 2017); nro. 18 (que durante dos meses le abonaron al actor el salario de forma retaceada”.

5.- De la prueba de exhibición ofrecida por la parte actora, resulta que la accionada no dio cumplimiento con la exhibición de los libros de registro único de personal, planillas o registro de asistencia, constancia de pago de cotizaciones de leyes nro. 14.250, 23.551 y 26.642, constancia de entrega de certificación de servicios del art. 80 de la LCT, recibo de pago de haberes efectuados al actor recibos de liquidación final y rubros indemnizatorio, legajo personal del Sr. Condori, constancia de entrega de ropa de trabajo y nómina de personal correspondiente a junio de 2018.

Atento a ello, por proveído del 10/02/22 se dispuso a tener presente para definitiva el apercibimiento del art. 61 del CPL.

6.- De la prueba testimonial ofrecida por la parte accionante resultan las declaraciones de Juan Carlos Alvarado, Norberto Omar Díaz, Juan Carlos Coronel y José Sixto Sánchez, quienes no fueron objeto de tachas por la parte accionada.

Así el Sr. Alvarado, declaró que conoce al Sr. Condori desde el 2011, porque él trabajaba en una panadería “cerca” desde hace veinte años, y que conoce que el actor trabajaba en el “galpón del azúcar que está en Lola Mora, pje. Amadeo Jacques y Mario Bravo.

Afirmó que “a nosotros nos mandaban a comprar azúcar”, que era un “galpón grande para el costadito tiene una oficina, que ahí estaban los dueños, ellos cobraban, nos mandaban a la vuelta y ahí nos entregaban los chicos que estaban trabajando, nos entregaban los fardos”. Indicó que allí “había mucha gente trabajando ahí, unas veinte (personas), había estibadores, gente que llevaba azúcar, tenía la máquina donde salen los farditos de azúcar también, es grande el galpón”.

Describió que “la bolsita que venía en los fardos dice Sol Tucumano, tiene la chimenea de un ingenio, ahora viene como marca “Pilar”, pero la mayoría de las veces “Sol Tucumano”.

Sostuvo que el actor ingresó a trabajar en el 2011 y que lo “dejó de ver” en 2018, que “a veces lo veía estibar las bolsas grandes, las de 50 kg, a veces lo veía trabajar en la máquina fraccionadora, pero la mayoría de las veces lo vi fraccionando el azúcar”. Indicó que la jornada laboral del actor era de lunes a sábados en el horario de 7 a 22 hs, y que él pasaba a las 21 hs y había gente trabajando en el domicilio de la accionada.

A la pregunta respecto de quien impartía las ordenes al actor, respondió que “cuando yo iba a comprar el azúcar, iba a la oficina nos atendía siempre

don Nelson o Matías, tienen un apellido raro, ellos eran los dueños y nos cobraban y le decían a cualquier de los chicos que nos carguen la compra. Ellos eran los dueños y los que daban las órdenes”.

A la aclaratoria solicitada por la actora, respecto a donde queda su lugar de trabajo, el testigo respondió “en Pasaje Luis Borges y Lola Mora, está a cuatro cuadras del galpón más o menos”.

A continuación, el testigo Díaz respondió que conoce al actor desde el 2011 y “que lo vio trabajando en la fraccionadora hasta el 2018”, que el dueño se llama Nelson.

Afirmó que él trabaja en una panadería y compra el azúcar en el negocio de la accionada que se encuentra en “Lola Mora y Mario Bravo”, que es un galpón que tiene una oficina donde van a comprar los productos, además cuenta con la fraccionadora y la estibadora de fardos de azúcar ahí.

Indicó que son aproximadamente veintidós trabajadores que prestan servicios en la firma accionada y que los nombres de los paquetes de azúcar que comercializa la firma son “Sol Tucumano” y “Pilar”.

Respecto al actor, manifestó que ingresó a trabajar en 2011 hasta el 2018, que lo hacía descargando azúcar y “en la fraccionadora también”, con una jornada laboral de 7 a “18, 19 o 20 h” de lunes a sábados. Agregó que el Sr. Condori recibía ordenes de “Nelson”.

A continuación, el testigo Coronel declaró que conoce al actor desde el 2012 o 2013 porque le vendió al actor y a sus compañeros de trabajo algunos teléfonos celulares, además señaló que vive cerca del domicilio de la firma accionada, que conoce la zona porque ahí “compraba el abono para circular, por ahí voy a comprar otras cosas por ahí, a los chicos los conozco de vista y además tenía una relación comercial”. Agregó que “también voy a la bulonería porque mi papá tiene taller, el pan lo compro en la panadería de la vuelta porque es rico el pan de ahí”.

Respecto al Sr. Condori indicó que lo vio trabajar en “la fraccionadora que está en la Amadeo Jacques y Lola Mora”, e indicó que como el actor y sus compañeros de trabajo le pagaban en forma celular los equipos celulares que él vendía, los iba a esperar a la salida para cobrarles o los sábados a las 14 o 15 hs.

Afirmó que el local de la demandada se ubica en Amadeo Jacques y Mario Bravo “a mano izquierda”, que “es un galpón grande, de dos terrenos aproximadamente, está al lado de un galpón de colectivos, se veía un portón grande de dos hojas, a mano derecha están las oficinas, en el medio tiene una cinta transportadora, a mano izquierda había una puerta más pequeña donde había un vestuario, el galpón en ese momento era verde”.

Indicó que eran veinte las personas que trabajaban para la accionada y que veía al actor en el fraccionamiento, carga de azúcar, sellado de paquetes y carga de azúcar, también “subiendo bolsas al camión”.

Respecto a la jornada cumplida por el actor afirmó que sabe que “entraban a las 8:00” y que le pedían que “pase a cobrar a las 22:00” o “los sábados a eso de las 15:00 que es cuando le pagaban el semanal” ya agregó que el actor le comentó que trabajaban de lunes a sábados.

Por último, el testigo Sánchez declaró que comenzó a trabajar en Jewells S.R.L en 2009 y que el actor ingresó en el 2010. Indicó que la firma accionada tiene su local en Amadeo Jaques al 2000 y explicó que “son dos galpones,

uno funciona bien, el otro está cerrado. Pero son dos galpones privados juntos. Por adentro son 12 máquinas que fraccionan azúcar. Por el fondo tenemos una tolva que le cargan bolsones de 1000 kg de azúcar. Ahí hay pallets de azúcar, que tiene como 15 personal” y agregó que “Esa gente está en negro. Es un galpón que tiene 25 metros, pintado de azul; tiene una puertita auxiliar en el costado, eso es lo que se ve de afuera”. Agregó que “En el galpón del lado, que estaba cerrado, eran 6 (trabajando en negro también)”.

A la pregunta respecto a cuáles son las actividades o sectores en el establecimiento de la demandada, respondió que “adentro hay una parte que se fracciona que es al fondo, hacen fardos de 10 kg. Y al fondo, para atrás hacen bolsitas de 15 y 25 kg. Del portón en adelante, hay hombres que descargan bolsas de 50 kg. Esa son gente en negro también, eran 4 normalmente. Son hombreadores”.

A la pregunta respecto a los nombres que figuraban en los productos que comercializaba la firma accionada, respondió que eran “Ledesma, Sol Tucumano y la otra es Tabacal”.

Afirmó que el actor ingresó en el 2010, que se dedicaba a “fraccionar azúcar, hacía farditos. Y algunas veces lo, veía en el fondo trabajando con la gente en negro, hacía limpieza...Lo tenían variado”; que su jornada era de 08:00 hasta las 13:00 hrs, y de ahí salían, descansaban 2 horas y entraban a las 15:00 hasta las 22:00 hrs de lunes a viernes. Y el sábado era de 08:00 a 14:00 hrs”, e indicó que él cumplía el mismo horario.

Sostuvo que el jefe era Matías Rinndal y el encargado era Darío Sánchez, que cobraban semanalmente, pero a los que estaban “en blanco” recibían semanalmente su remuneración.

7.- De la prueba de inspección ocular producida en autos, resulta que apersonado el oficial de justicia en el domicilio de Amadeo Jacques nro. 1282 de esta ciudad, en 03/03/22, fue atendido por Valentín Zenteno quien no se opuso a la medida.

Así, resulta que el oficial de justicia contestó a los puntos de pericia requeridos que: “a) En el domicilio funciona una fraccionadora de azúcar; b) los productos que se fraccionan son: azúcar, y a veces porotos; c) Se hace constar que el edificio se compone de un galpón en donde se acopia el azúcar; una sala de máquinas donde están las fraccionadoras contiene un entepiso que contiene 2 maquinas; una oficina; sanitarios y 1 vestuario”.

No hay más prueba a considerar.

III.1.- En primer lugar, cabe destacar que, encontrándose negada la relación laboral, pesa sobre la parte actora la carga de la prueba de la prestación de servicios, al ser este el hecho que constituye el presupuesto fáctico de su pretensión, debiendo en tal sentido aportar al proceso todos los elementos necesarios, suficientes y pertinentes que puedan acreditar que los hechos sucedieron de la forma descripta en la demanda.

Es dable advertir que el art. 302 del CPCC (de aplicación supletoria al fuero, según art. 14, CPL), es claro en cuanto a que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido y que cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión. No cabe duda de que, en casos como el que nos ocupa, encontrándose controvertida la existencia de la relación laboral entre la actora y la accionada, afirmada por aquella y negada por esta, la carga de la prueba de tal hecho recae

sobre la primera.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que “incumbe al actor acreditar la 'relación de trabajo' y que las pruebas que utilice sean suficientemente fundadas para probar los trabajos realizados y que los mismos se llevaron a cabo en relación de dependencia; en este aspecto esta Corte ha sido clara” (cfr. CSJT, sentencia N.º 893 del 08/9/2008, “Suárez, Armando Ariel vs. Taller Coquito S.R.L. s/ Cobro de pesos”).

Sentados tales conceptos, en el marco del plexo probatorio previamente analizado y de las consideraciones efectuadas al respecto, cabe anticipar que se encuentra suficientemente acreditado que el Sr. Juan Eladio Condori efectivamente prestó servicios bajo las órdenes de Jewells SRL.

Fundamenta tal conclusión, en primer lugar, el reconocimiento de la propia accionada en cuanto a que explota un establecimiento dedicado al fraccionamiento de azúcar en la calle Amadeo Jacques nro. 1282.

Ello también, surge de la inspección ocular efectuada en 03/03/22, donde el oficial describió que el edificio de la firma se compone de un galpón “en donde se acopia el azúcar; una sala de máquinas donde están las fraccionadoras” y con un entepiso con dos máquinas, una oficina, sanitarios y un vestuario.

Es decir que, acreditada la existencia del negocio de la accionada, se suma el resultado de la prueba testimonial rendida en autos, la cual - reitero- no fue objeto de tachas, en los cuales los testigos reconocieron que el actor trabajaba para la firma accionada, dando razones suficientes de sus dichos, entre las que se destaca que los testigos Alvarado y Díaz declararon que trabajaban en una panadería cercana al establecimiento demandado e indicaron que iban a comprar fardos de azúcar, que eran atendidos por “don Nelson” o Matías (Rinsdahl) y que en esas circunstancias conocieron al actor.

En el caso del testigo Coronel, este afirmó que mantenía una relación comercial con el actor y con sus compañeros de trabajo ya que le venía teléfonos celulares cuando estos salían de trabajar. Además, indicó que vivía cerca del negocio demandado y que le quedaba cerca de donde compraba el “abono para circular”.

Asimismo, el testigo Sánchez afirmó que prestó servicios para la firma demandada en local de Amadeo Jaques “al 2000”, y que trabajó sin haber sido registrado por su empleador.

Por ello, estimo que las afirmaciones de los testigos ofrecidos en autos, al haber brindado razones suficientes de sus dichos y habiendo presenciado sobre las circunstancias sobre las que declararon, permiten hacer efectivo el apercibimiento del art. 360 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial (anterior art. 325 del CPCyC) en cuanto a la posición nro. 8 (que el actor prestó servicios para Jewells SRL desde el 15/11/11).

A su vez, corresponde destacar que nuestra CSJN ha pronunciado que “En cuanto a la consideración del Tribunal de Mérito en orden a que las presunciones derivadas tanto del derecho sustantivo como adjetivo (artículos 55 de la LCT y 61 del CPL) requieren, para tornarse operativas, que previamente se acredite la existencia de relación laboral y que tal situación no se ha verificado en autos, cabe recordar que esta Corte tiene dicho, respecto a la presunción del artículo 55 de la LCT, que para tornarse operativa esta requiere que se acredite previamente la existencia de relación laboral entre las partes, pero carece de eficacia para probar la existencia

misma de dicho vínculo (cfr. CSJT, sentencia N.º 590 de fecha 29-07-2002, “Delgado, Juan Carlos vs. Avícola San Nicolás y otros s/ Despido y otros”. En igual sentido, CNAT, Sala IX, “Orue, Florentino vs. Grupo Segurcity S.A. y otro”, 19-12-2006, La Ley On-line: AR/JUR/9605/2006). Por lo demás, de lo expuesto en los párrafos anteriores se infiere que la aplicación del segundo párrafo del artículo 61 del CPL se encuentra estrechamente vinculada a la plataforma fáctica de la causa, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 33 y 40 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, CPCC), supletorio (cfr. artículos 14 y 86 del CPL), sin que las constancias de autos evidencien que la Cámara se hubiere apartado de las normas que rigen la valoración de las pruebas al no haber dispuesto tener por ciertas las afirmaciones de la actora. (Sala Laboral y Contencioso Administrativo, en los autos “Varela Julio Esteban vs. Moreno José Antonio s/ cobro de pesos”, sentencia nro. 794 del 26/06/17).

Sumado a ello, la accionada no solo no produjo prueba alguna, sino que tampoco cumplió con su obligación de exhibir la documentación obrante en su poder. La omisión de exhibición de la totalidad de la documentación laboral perteneciente al actor conforme emerge del pertinente cuaderno de pruebas de la actora Nro. 4, hace aplicable el apercibimiento contenido en el artículo 61 de la ley 6204, como así también, el apercibimiento previsto en el artículo 55 de la LCT, debiéndose tener por ciertas las declaraciones de los trabajadores sobre las circunstancias que debieron constar en los asientos de la documentación cuya intimación se exigió.

En este sentido, la falta de exhibición del libro especial previsto por el artículo 52 de la LCT torna operativa a su respecto y plenamente la presunción contenida en el artículo 55 del régimen legal aludido.

Igualmente, es dable recordar que la prueba de confesión consiste en la declaración de una de las partes provocada por quien tenga interés contrario a aquélla (ponente), mediante la cual se intenta que la declarante (absolvente) reconozca como ciertos los hechos sobre los cuales el ponente ha fundado su pretensión o defensa. De allí, que se pretende que reconozca como ciertos algunos hechos que le son desfavorables (porque perjudican su posición en forma directa) o por lo menos que son favorables a la pretensión o defensa esgrimida por la contraria. Por su parte, el artículo 325 del CPCC solamente posibilita al Juez a tener por confeso al absolvente, pero no lo obliga, salvo que existieren elementos corroborantes de las posiciones.

Huelga aclarar que, en ambos casos, las presunciones son *iuris tantum*, por tanto, puede controvertirse por acreditación de prueba en contrario. No obstante, ello, la accionada no aportó prueba alguna en contrario.

En conclusión, de la valoración conjunta del plexo probatorio considero que la parte actora acreditó el vínculo laboral mantenido por el actor con la demandada -contrato por tiempo indeterminado, conforme artículos 21 y 90 de la LCT-

Cabe precisar al respecto que la relación laboral cuya existencia y modalidad debe ser probada por quién la invoca, tiene su configuración más evidente cuando la persona física demuestra haber prestado servicios en beneficio de su empleador.

Se advierte entonces en el caso que nos ocupa que una nota definitoria al momento de establecer un vínculo de naturaleza dependiente resulta ser la prestación de servicios por parte de la actora en el establecimiento de la

demandada, esto es, la inserción de esta como trabajador en un esquema empresario completamente ajeno, desde el cual se le proveía una estructura para trabajar.

Acreditada entonces la prestación de servicios por parte del actor, considero que siendo los testimonios coherentes y concordantes -y no obrando en autos otras pruebas útiles que los contradigan-, es dable afirmar que se encuentra suficientemente probada la existencia de una relación laboral con la demandada.

2.- Determinada la existencia de la relación laboral mantenida entre las partes, resulta oportuno expedirme sobre las características de la relación laboral que vinculaba al actor con la firma demandada.

Para tal fin, considero que preliminarmente es necesario determinar el convenio colectivo aplicable, para ello estimo pertinente recordar el marco normativo como punto de partida del análisis.

Al respecto, cabe tener presente que el Decreto N° 1135/2004 que ordena los textos de las Leyes N.º 14250 y 23546 y sus respectivas modificatorias, prevé en su art. 16 los diferentes ámbitos personales y territoriales en que pueden celebrarse los convenios colectivos de trabajo conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa: convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial; convenio intersectorial o marco; convenio de actividad; convenio de profesión, oficio o categoría y convenio de empresa o grupo de empresas. Asimismo, en su art. 4 establece que las normas nacidas de las convenciones colectivas que sean homologadas regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro de la zona a que estas convenciones se refieran.

Así, respecto al ámbito de aplicación el CCT 130/75 (requerido por el actor) establece en su capítulo II que el convenio “será de aplicación a todos los trabajadores que se desempeñen como empleados u obreros en cualquiera de las ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro o como administrativos en explotaciones industriales en general, o que tengan boca de expendio de los productos que elaboran, y en las agropecuarias, todos los que son representados por la Confederación General de Empleados de Comercio”.

A su vez, en el tercer párrafo de este artículo enuncia a que actividades será de aplicación, incluyendo en el inciso c) “actividades afectadas a: Fraccionamiento de Productos Químicos; Ventas de Terrenos; Financieras y de Crédito; Consignatarios de Hacienda, Cereales y/o Frutos del País, Empaques de Frutas; Remates-Feria; Asesoramiento técnico de Seguros; Comisionistas de Bolsa; Mercado de Valores; Transporte (personal administrativo); Extracción de Arena; Transporte de Cemento Portland; Institutos o Casas de Información de Créditos; Agencias de Negocios; Mercados de Concentración de Frutas y Verduras; Agencias de Lotería, de Quiniela y/o Prode; Agencias de Viaje y Turismo; Casas Fotocopistas y/o que ejecuten copias a máquina; Editoriales, Exportación de Cereales; Empresas Fotográficas y Casas de Fotografías. Todo el personal que realiza tareas de reparación, armados o mantenimiento, dentro de su especialidad en establecimientos comerciales. Envasamiento; fraccionamiento; distribución y carga y descarga de gas y otros combustibles o lubricantes; Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio; Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles; Servicios Fúnebres; Seguros de Sepelios; Estudios Jurídicos y/o Contables; Escribanías; Lavaderos de Automóviles; Acopiadores de Cereales y Frutos del país; Estudios de Asesoramientos Impositivos y/o Laboral y/o Previsional; Organizaciones de Venta y Rifas; Compra Venta de Cereales; Hacienda y/o Mercaderías en general; Depósitos de

almacenamiento; Procesamiento electrónico de Datos; Centro de Computación; Empresas de limpieza y desinfección; Cooperativas de Crédito y/o Consumo; Venta de Alfajores; Promoción y/o Degustación; Lavaderos de Ropa; Venta ambulante y/o playa”.

Partiendo de tales consideraciones, estimo que le asiste razón al actor en cuanto a que la relación laboral mantenida con su aquí empleadora debía ser registrada dentro de las prescripciones del CCT N.º 130/75. Ello por cuanto fue reconocido por informado por la DGR en cuanto a que Jewells SRL se encuentra registrada en las actividades de “fraccionamiento de producción de terceros”, lo que coincide con lo expuesto por los testigos Juan Carlos Alvarado y Norberto Omar Díaz, quienes indicaron que iban a comprar fardos de azúcar en dicho establecimiento.

Por lo que teniendo en cuenta la doctrina legal fijada por la CSJT en los autos “Mendoza Elizabeth de los Ángeles vs. Rivadeneira Andrea Constanza s/ cobro de pesos” (Sala Laboral y Contencioso Administrativo - expte. N.º L387/11, sentencia N.º 1919 del 17/10/2019) “Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que sin fundamentos suficientes aplica un convenio colectivo no invocado por el trabajador”; estimo pertinente declarar que resulta aplicable al caso de autos el CCT 130/75 reclamado por la parte actora. Así lo declaro

3.- Ahora bien, resulta oportuno expedirme sobre las restantes características de la relación laboral que vinculaba a las partes.

En lo que respecta a la fecha de ingreso del trabajador, considero que debe estarse a la denunciada por aquel en su demanda, es decir, al 15/11/11, la que resulta verosímil a partir de lo expuesto por los testigos Alvarado y Díaz, quienes coincidieron al indicar que vieron al actor trabajando en Jewells SRL desde el 2011.

Sustenta además la decisión adoptada el hecho de la falta de registración de la relación laboral por parte de la accionada y su expresa negativa de reconocer el vínculo mantenido con la accionante, que como se expresara previamente, se encuentra suficientemente acreditado.

Ello además de que la accionada no solo no produjo prueba alguna, sino que tampoco cumplió con su obligación de exhibir la documentación obrante en su poder. La omisión de exhibición de la totalidad de la documentación laboral perteneciente a los actores conforme emerge del pertinente cuaderno de pruebas de la actora Nro. 4, hace aplicable el apercibimiento contenido en el artículo 61 de la ley 6204, como así también, el apercibimiento previsto en el artículo 55 de la LCT, debiéndose tener por ciertas las declaraciones de los trabajadores sobre las circunstancias que debieron constar en los asientos de la documentación cuya intimación se exigió.

En este sentido, la falta de exhibición del libro especial previsto por el artículo 52 de la LCT torna operativa a su respecto y plenamente la presunción contenida en el artículo 55 del régimen legal aludido. Analizando esta prueba a la luz de la testimonial producida en autos, y de la prueba de confesión, según lo afirmado por el proponente en la posición n. 8, y haciendo efectivo el apercibimiento previsto por el Art. 360 del CPCC (Ley 9531) resulta procedente tener por cierta la fecha de ingreso señalada por el actor en su demanda. Así lo declaro.

4.- En cuanto a las tareas prestadas por el Sr. Condori, cabe mencionar que este reclamó que le correspondía la categoría de “maestranza B”, según CCT 130/75, ya que denunció que cumplía tareas de “embolsador”, “estibador”

y “bolseador de bolsas de azúcar” de 50 kg.

Estas tareas coinciden con lo declarado bajo juramento por los testigos, por lo que, teniendo en cuenta el apercibimiento del art. 360 del CPCC, estimo tener por cierta la posición 9 (que el actor realizaba tareas de embolsador, estibador y bolseador de bolsas de azúcar de 50 kg).

Por ello, corresponde tener por acreditado que el Sr. Condori cumplía las tareas propias de la categoría de “maestranza” b), aplicable al “personal de envasado y/o fraccionamiento de productos alimenticios” (art. 5 b) del CCT 130/75). Así lo declaro.

5.- En cuanto a su jornada de trabajo, el actor sostuvo que se extendía de lunes a viernes de 8 a 13 h y de 15 a 22 h, y los días sábados de 8 a 15 h, sin embargo, este no efectuó reclamo por horas extras.

Esta jornada coincide con la declarada por el testigo Sánchez, quien también afirmó haber trabajado para la firma accionada y con lo afirmado por el testigo Coronel quien indicó que iba a cobrar al actor y a otros compañeros de trabajo a la salida de su trabajo a las 22 hs o los sábados “a eso de las 15”.

Así de los testimonios rendidos en autos, y la posición nro. 11 (que el actor se desempeñó en jornada completa, de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 13:00 y de 15:00 hasta las 22:00 hs y los días sábados desde las 8:00 hasta las 15:00 hs), resulta posible concluir que la jornada prestada por el señor Condori en favor de la accionada alcanzaba como mínimo las 48 horas semanales previstas por la Ley N° 11544.

Por último, debe tenerse en cuenta que el actor no efectuó reclamo alguno en concepto de horas extras, ni por falta de otorgamiento de las correspondientes pausas entre jornadas y los descansos semanales, por lo que se debe tener en cuenta que el trabajador cumplía con jornada laboral completa y normal.

De allí que las sumas de dinero que sostuvo el actor haber recibido en concepto de remuneración (\$4000 semanales) resultan insuficientes con relación a lo que debía percibir, en atención a la modalidad de prestación del servicio con carácter permanente, la categoría y jornada cumplida de acuerdo a la escala salarial vigente según CCT 130/75, generándose a su favor las diferencias salariales por el período reclamado. En consecuencia, la remuneración que debió percibir será determinada en la planilla que forma parte de la presente sentencia en función de las condiciones laborales declaradas y lo establecido en la escala salarial aplicable, correspondiente a su categoría de “maestranza B”, vigente a la época. Así lo declaro.

IV.- En mérito a lo considerado, respecto a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la parte accionada, cabe recordar que la legitimación para obrar hace a una coincidencia entre la persona que requiere el servicio judicial y el que se encuentra dentro del proceso ejerciendo determinada pretensión” (cfr. Osvaldo Alfredo Gozaíni en Defensas y Excepciones, pág. 37. Ed. Rubinzal – Culzoni).

Siguiendo las enseñanzas de Lino E. Palacio, sostiene que “La falta de legitimación para obrar es una defensa basada en la ausencia de la cualidad necesaria de la persona que reclama una determinada pretensión a otra...”. A su turno nuestra jurisprudencia ha destacado: la legitimación procesal es el requisito en virtud del cual debe mediar coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso, y aquéllas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva), respecto de la materia

sobre la cual el proceso verse (cfr. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, pág. 406. Ed. Abeledo Perrot, 1975). La defensa de falta de acción, en su faz activa, es procedente si el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. Dres. Dato - Brito - Area Maidana in re: Sucesión de Brizuela Santiago M. c/ Brito Víctor Hugo y/u otro s/ daños y perjuicios, 22/10/1999, sentencia N.º 815. Como criterio general se refiere a la inexistencia de título o derecho a litigar en el actor, o de la calidad de deudor o sujeto a un reclamo atribuida al demandado y son de interpretación restrictiva por aplicación del principio constitucional de defensa en juicio (Falcón "Tratado de Derecho Procesal Civil", t. II, pág. 271)" (cfr. Excm. Cámara del Trabajo Tucumán, Sala I, Conde Rosa c/ Ortiz Manuel y otra s/ cobro de pesos, 27/09/13).

Por tal motivo, resuelto que el actor tenía derecho a iniciar la presente acción en contra de la firma accionada y que acreditó que esta fue su empleadora, es que se rechaza la defensa de falta de acción opuesta. Así lo declaro.

Segunda cuestión: causa y justificación del distracto.

I.- Corresponde determinar el acto que operó la rescisión de la relación laboral, su causa y justificación.

Al respecto, el demandante afirmó que, como consecuencia de un accidente de tránsito inculpable ocurrido en la madrugada del 08/10/17, sufrió la lesión de una rodilla con diagnóstico de rotura de ligamentos y menisco que no le permitió seguir asistiendo a su puesto de trabajo durante aproximadamente dos meses, pero como no contaba con obra social, no pudo operarse su rodilla.

Afirmó que, durante ese periodo el Sr. Condori percibió su salario "en forma retaceada", pero por "estricta necesidad alimentaria" y sin haberse recuperado, debió volver a prestar servicios en condiciones de precariedad hasta que durante los primeros días de julio de 2018 se le impidió el ingreso al lugar de trabajo.

Sostuvo que, ante esta situación, remitió telegrama en 10/07/18 solicitando que se aclare su situación laboral y se lo proceda a registrar acorde a sus reales condiciones laborales, le abonen diferencias salariales, todo ello bajo apercibimiento, en caso de silencio o negativa de considerarse injuriado y despedido por exclusiva culpa patronal, lo que hizo efectivo mediante telegrama del 26/07/18.

En su versión de los hechos, la demandada negó que el actor tenga derecho a considerarse despedido ya que no era su empleado.

II.-. Conforme quedó planteada la cuestión y en atención a los relatos vertidos en la demanda y su contestación, corresponde analizar la prueba aportada al efecto:

1.- Del intercambio epistolar producido entre las partes, cuya autenticidad y fecha de recepción informó el correo oficial, resulta que:

1.1.- Mediante telegrama CD079512543, impuesto en 10/07/18 y recepcionado en 11/07/18, el actor "Intimo registración y ocupación. Bajo apercibimiento de despido. Condori Juan Eladio, DNI 33.702.900 CUIL 20-33702900-1 con domicilio colonia número 9 del departamento Cruz Alta, quien se desempeña en estricta relación de dependencia para la firma demandada, recibiendo ordenes de Matías Rinsdahl desde el 15 de noviembre del 2011, en el establecimiento ubicado en Amadeo Jackes 1282 de esta ciudad., asimismo me encontré bajo la supervisión Darío Sánchez. Mis funciones son embolsador, estibador y bolseador de bolsas de azúcar de 50 Kg, desempeñándome en una jornada de lunes a viernes desde las 8:00 hasta

las 13:00 hs y de 15:00 hasta 22:00 hs y los días sábados desde las 8:00 hasta las 15:00 hs, por mi actividad percibí como única remuneración, la cantidad de \$ 4.000 (cuatro mil pesos) por semana por todo concepto. En la madrugada de fecha 8 de octubre del 2017, sufrí un accidente de tránsito inculpable, lesionándome la rodilla con diagnóstico de rotura de ligamento y menisco (conforme certificado de mi medico Dr. José Gustavo Figueroa M.P N° 7695), lo que no me permitió seguir asistiendo a mi puesto de trabajo por aproximadamente 2 meses, periodo, en los cuales me abonaron salario, de forma retaceada. Por estricta necesidad y aunque no me encuentro recuperado - ya que preciso de una intervención quirúrgica - volví a prestar servicios en las mismas condiciones de precariedad, incurriendo la firma en fraude laboral, previsional y fiscal, ya que ni siquiera me encuentra cubierto de obra social, razón por la cual no he podido operarme. Que desde los 1eros días del mes de Julio, no me permiten el ingreso al lugar de trabajo. Atento a lo expuesto INTIMO a UD, en el término de 48 hs. aclare mi situación laboral; asimismo en idéntico plazo, proceda a mi registración, acorde a las condiciones de trabajo denunciadas desde mi fecha real de ingreso; abone diferencias de remuneraciones de los últimos 24 meses no prescriptos, todo bajo expreso apercibimiento en caso de silencio o negativa de su parte, de considerarme gravemente injuriado y despedido por su exclusiva culpa y responsabilidad. Queda usted debidamente notificado e intimado”.

1.2.- Por carta documento nro. CD843602322, impuesta en 13/07/18, la accionada comunicó al actor que “rechazo vuestro Telegrama Ley 23.789 remitido en fecha 10 de Julio de 2.018 por improcedente y falaz. Niego que Ud. se haya desempeñado en relación de dependencia de ésta empresa desde fecha 15 de Noviembre de 2.011. Niego que vuestras funciones hayan sido de embolsador, estibador, y /o bolseador de bolsas de azúcar de 50 kg, desempeñándose en jornadas de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 22.00 hs, y los sábados de 08.00 a 15.00 hs. Niego tener conocimiento que Ud. haya tenido un accidente de tránsito en fecha 08 de Octubre 2.017, lesionándose la rodilla con diagnóstico de rotura de ligamento y menisco. Niego que luego de ese supuesto accidente de tránsito Ud. Haya vuelto a prestar servicios en ésta firma. Asimismo Niego que ésta empresa haya incurrido en laboral, previsional y/o fiscal, y niego que desde los primeros días de Julio se le haya negado el ingreso a ésta empresa, toda vez que Ud. No se ha presentado, ya que Ud. no presta servicios en la misma”.

1.3.- Mediante telegrama nro. CD079513962, impuesto en 26/07/18 y recepcionado en 30/07/18, el actor se dio por despedido en los siguientes términos “configuro despido por su exclusiva culpa ratifico telegrama laboral. intimo se me abone liquidación final indemnizatoria y rubros de ley Condori Juan Eladio, DNI 33.702.900, CUIL 20-33702900-1, por el presente Rechazo CD Despacho N° 643602322, por ser la misma improcedente, falaz y de evidente mala fe. Ratifico TCL de fecha 10/07/2.018, en todos y cada uno de sus términos. Niego que pueda rechazar mi telegrama de fecha 10/07/2.018 ni ningún otro. Niego que el mismo sea improcedente y falaz. Niego que pueda negar mi relación de dependencia con su empresa desde fecha 15/11/2.011. Niego que pueda negar las tareas desempeñadas y jornada cumplida para vuestra empresa. Niego que desconozca mi accidente de tránsito ocurrido en fecha 08/10/2.017 y que en el me haya lesionado la rodilla. Niego que pueda negar que luego del accidente no me haya presentado a prestar servicios para la firma. Niego que pueda negar que no Ud. no haya incurrido en fraude laboral, previsional y/o fiscal. Niego que pueda negar que en los primeros días de Julio me

hayan negado el ingreso a prestar tareas. Niego que pueda negar que mi persona no preste servicios para la firma Jewells SRL. Así ante la falta de registración, negativa y renuencia de vuestra parte respecto de mi situación laboral y rubros intimados, me considero gravemente injuriado y despedido por su exclusiva culpa y procedo a la denuncia de mi contrato de trabajo. En consecuencia, intimo a Ud., abone a mi parte, en el plazo de ley, liquidación final y rubros indemnizatorios en los términos del Art. 245 de la LCT conforme mi real fecha de ingreso y condiciones de trabajo; Diferencias salariales de los últimos 24 meses; Art.80 LCT., todo bajo expreso apercibimiento de las multas contenidas en los Art/s 1 y 2 de la ley 25.323; Art. 8 de la ley 24.013 y Art. 9 de la ley 25.013 o Art. 275 de la LCT por su conducta temeraria y maliciosa. Asimismo, mi parte viene soportando esta situación debido a la imperiosa necesidad de trabajar, por lo que el actuar de la patronal de mantenerme sin registración y sin beneficios sociales desde mi ingreso -sucedido en 15 de Noviembre/2.011 - resultan un patente acto de discriminación laboral en los términos del Art. 1 de la ley 23.592, cuyos agravantes serán demandados. Se deja constancia que los rubros integrativos de mi liquidación final resultan de estricto carácter alimentario y que su falta de pago es pasible de las multas administrativas aplicadas por la Secretaria de Estado de Trabajo. Se comunica el inicio de las acciones correspondientes”.

1.4.- Por telegrama nro. CD904012281, impuesto en 16/08/18 y recepcionado en 17/08/18, el actor intimó al pago de rubros indemnizatorios y diferencias salariales (arts. 232, 233 y 245 LCT), bajo apercibimiento de las multas contenidas en Art. 1 y 2 de la ley 25.323.

1.5.- Por telegrama nro. CD963525857, impuesto en 30/07/19 y recepcionado en 31/07/19, el actor hizo efectivo el apercibimiento de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 e intimó la entrega de la certificación de servicios y del art. 80 de la LCT.

2.- Del informe remitido por el Hospital Zenón Santillán, surge que el actor ingresó a la guardia de dicha institución por accidente de tránsito "moto - moto" en 08/10/17 a horas 23, por dolor en rodilla izquierda. Fue intervenido quirúrgicamente en 09/10/17, practicándosele una "reducción y estabilización de la rodilla, toilette y sutura de herida", diagnóstico clínico "luxación de rodilla izquierda" y "herida de brazo izquierdo".

No hay más prueba a considerar.

III.- Así las cosas, cabe determinar la fecha y el acto del despido, teniendo en cuenta las fechas de recepción y remisión de las misivas cursadas entre las partes en lo que al distracto se refiere.

Del intercambio epistolar hasta aquí analizado resulta que el distracto operó mediante el telegrama nro. CD079513962, impuesto en 26/07/18 y recepcionado en 30/07/18. Por lo que, en aplicación de la teoría recepticia que rige en materia del intercambio epistolar en el derecho laboral, corresponde tener a esta última fecha como la de extinción del vínculo laboral.

Establecida la fecha de la extinción del vínculo y que esta tuvo lugar por despido indirecto, resta determinar si la ruptura contractual que pretende atribuir responsabilidades indemnizatorias cumple con los parámetros de la justa causa por injuria grave (artículo 242 de la LCT), que justifiquen no mantener vigente el vínculo laboral (artículo 10 de la LCT).

En forma previa cabe recordar que el trabajador intimó a la accionada a que aclare su situación laboral – ya que no se le permitió el ingreso al lugar de trabajo-, al tiempo que intimó a la registración del vínculo laboral de acuerdo a

las condiciones que detalló y a que le abonen diferencias de remuneraciones de los últimos 24 meses. Asimismo, resulta que la accionada respondió con una negativa de la relación laboral.

Al respecto cabe decir que, ciertamente, la negativa categórica de la parte empleadora -reflejada tanto en sus misivas como al contestar demanda- cuando hay falta de registración del contrato, evaluada teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias fácticas del caso, de conformidad a las pautas y bajo el prisma contemplado por el artículo 242 de la LCT, violenta el deber de buena fe previsto en el artículo 63 de la LCT y el deber de ocupación impuesto en el artículo 78 LCT, cuya gravedad autoriza a desplazar el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10, LCT), imposibilita la continuidad del vínculo y justifica la situación de despido en que se colocó el actor.

Sobre el particular, la jurisprudencia pronunció que "...La negativa al actor de la condición de trabajador subordinado por parte de la empleadora, es una injuria que justifica plenamente la ruptura del contrato por parte de aquél (CNTrab., sala VII, 22/9/99, DT, 1990- A-235, íd. Sala VIII, 29/11/91, DT, 1992-B-1446)".

Ello es así teniendo en consideración que la Corte Suprema local expresa como doctrina legal que "La negación de la relación laboral por parte del empleador como respuesta al emplazamiento del trabajador, constituye injuria a los intereses de éste, que hace innecesaria la notificación prevista en el art. 243 LCT a los fines de comunicar al empleador el despido indirecto" (CSJT, López María Teresa vs. Sema de Sabino Mirta Elda s/Indemnizaciones, sent. Nro. 462 del 09/06/2000).

En la misma dirección, dispuso que "Es arbitrario el pronunciamiento que rechaza las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario con el argumento de que el actor no probó el despido verbal invocado, prescindiendo de la circunstancia esencial de que frente a la intimación cursada para que se ratifique o rectifique el mismo, el accionado contestó negando la relación laboral, lo que constituye una injuria a los intereses del trabajador que hace innecesaria la notificación del despido indirecto, tornándose procedentes las indemnizaciones correspondientes" (CSJT, "Correa Daniel Rodolfo vs. Lenoir Orlando Federico y otro s/ Cobros", sent. Nro. 442 del 30/05/2005; "Albornoz José Ricardo vs. Renauto Tucumán S.A. s/ Cobro de pesos", sent. Nro. 1001 del 07/11/2005).

Es así que, habiéndose acreditado en autos la existencia de relación laboral, pese a la negativa formulada por la accionada, teniendo en cuenta que la falta de registración constituye por sí misma causal grave de injuria que desplaza el principio de conservación del contrato de trabajo contenido en el artículo 10 de la LCT, considero que se encuentra justificado plenamente el despido indirecto efectivizado por el actor en los términos de los artículos 242, 246 y 245 de la LCT, lo que torna procedente el pago de las indemnizaciones por despido injustificado reclamadas en la demanda.

En otras palabras, se configura como una injuria -respondiendo a un criterio objetivo que se refleja en el incumplimiento inmotivado de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo (cfr. CSJN, 9-8-2001, "Vera, Daniel Alejandro c/Droguería Saporiti SA Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria", Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN, www.rubinzalonline.com.ar, RC J102494/2009) - que no admite la prosecución de la relación laboral.

Ello es así, en virtud de que, tal como lo expone la doctrina,

“(…) esa actitud conlleva la negativa a reconocer al trabajador no sólo en su carácter de integrante de la organización empresarial, sino de todos los derechos que conlleva el vínculo laboral. Por lo tanto, si el empleador desconociera la condición de trabajador subordinado del dependiente ante su reclamo expreso, resultará justificada la decisión de éste de considerarse en situación de despido indirecto” (cfr. Raúl Horacio Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo, Ed. Rubinzal Culzoni, T. III, p. 466 con cita de numerosa jurisprudencia).

Como corolario de lo anterior estimo que al haberse ya determinado la existencia de la relación laboral y la falta de registración del vínculo en desmedro de los derechos del trabajador, el reclamo por él formulado se encuentra debidamente justificado.

Al haberse configurado una capital inobservancia de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, ello constituye una injuria que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación que uniera a las partes y habilita a que el actor diera por terminado el vínculo en virtud del despido indirecto, generando a su favor el derecho al cobro de los rubros emergentes del distracto. Así lo declaro.

Tercera cuestión: Procedencia o no de rubros e importes reclamados.

I.- Pretende el accionante el cobro de la suma de \$975.527,13; con más los intereses, costas y gastos, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, vacaciones proporcionales no gozadas de 2018, SAC 1er semestre y proporcional 2do semestre de 2018, diferencias salariales de los últimos 24 meses, multas de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323, multa del art. 80 de la LCT y multas artículos 8 al 15 de la ley 24.013. Solicitó que se haga entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de aportes.

A su vez, en la contestación de demanda, la parte accionada planteo defensa de prescripción liberatoria respecto a todos los rubros reclamados por la parte actora argumentando que se cumplieron más de dos años del plazo establecido por el art. 256 de la LCT.

Corrido traslado de la excepción, la parte actora solicitó su rechazo por cuanto señaló que el planteo resulta genérico al no indicar a cuáles rubros se refiere. Además, indicó que la demanda fue interpuesta en 16/08/19 y que no transcurrió el plazo de dos años desde la extinción del contrato de trabajo mantenido entre las partes.

A los fines del tratamiento de la presente cuestión, considero necesario precisar que el instituto de la prescripción liberatoria desempeña un papel de primer orden en el mantenimiento de la seguridad jurídica, por cuanto el abandono prolongado de los derechos crea incertidumbre, inestabilidad y falta de certeza en las relaciones entre los hombres. Tal instituto tiene una manifiesta utilidad por cuanto obliga a los titulares de los derechos a no ser negligentes en su ejercicio y pone claridad y precisión en las relaciones jurídicas. La prescripción afecta la posibilidad de reclamar en juicio el derecho pretendido debido a haberse cumplido el plazo de tiempo previsto por la ley, sin que el interesado haya ejercido la acción pertinente (art. 256 LCT).

Aclarado ello, cabe poner de relieve en primer lugar que la presente demanda fue interpuesta el 16/08/19, y que a través de aquella la actora pretende -entre otros- el cobro de las diferencias salariales por los últimos 24 meses

(es decir desde el 30/07/16 al 30/07/18).

Sin embargo, del marco probatorio analizado en las cuestiones anteriores, resulta que la actora en sus telegramas remitidos en 10/07/18 y 26/07/18 reclamó dichas diferencias salariales.

Cabe tener presente que el art. 256 de la LCT establece que los créditos laborales se extinguen por el transcurso de dos años de silencio o inactividad de su titular pudiendo interrumpirse por reclamación administrativa durante su trámite, pero en ningún caso por un plazo mayor de seis meses, sin perjuicio, de las demás causales de interrupción y suspensión previstas en el Código Civil (art. 257 LCT).

La aludida remisión al Código Civil hace aplicable las disposiciones del art. 2541 del CCC que dispone que el curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.

A su vez, el art. 2546 del mencionado digesto prevé que el curso de la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio.

Dichas normas consagran dos reglas importantes: la primera es que la prescripción se suspende por una sola vez y por un lapso de un año por la constitución en mora del deudor efectuada en forma fehaciente y la segunda es que la interrupción de la prescripción se opera por cualquier petición efectuada ante autoridad judicial, aunque fuera defectuosa.

Ahora bien, atento a la mora automática que rige en el derecho del trabajo (art. 137 LCT), podría entenderse que el art. 2541 del Código Civil y Comercial no es aplicable, sin embargo “la doctrina judicial de los autores estableció que esa disposición si es aplicable, por lo tanto el trabajador, no obstante la mora en que incurrió el empleador, mediante una intimación puede gozar del plazo de suspensión de la prescripción, con tal que la efectúe en forma auténtica” (Vázquez Vialard y Raúl Ojeda “Ley de Contrato de Trabajo”, tomo III, p. 586). Igualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha sostenido que “La intimación de pago por conceptos adeudados cursada telegráficamente, es idónea para configurar la suspensión de la prescripción liberatoria del 2º párrafo del art. 3986” (CSJTuc., sentencia N.º 522 del 27/6/2000).

De lo expuesto se puede colegir que el telegrama laboral que la actora remitió en 10/07/18 a su ex empleadora tuvo eficacia para constituirla en mora por interpelación fehaciente a tenor de lo dispuesto en el art. 2541 del CCC por las diferencias reclamadas a partir de marzo de 2017, por lo que estas diferencias eventualmente prescribían en 30/08/19.

Distinta solución corresponde a las diferencias respecto a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; y enero y febrero de 2017; por cuanto debieron ser abonados dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes: (julio 2016 hasta el 04/08/16; agosto 2016 hasta el 06/09/16; septiembre 2016 hasta el 06/10/16; octubre 2016 hasta el 04/11/16; noviembre 2016 hasta el 06/12/16; diciembre 2016 hasta el 05/01/17; enero 2017 hasta el 06/02/17 y febrero de 2017 hasta el 06/03/17); debido a que el accionante al remitir el telegrama del 10/07/18 suspendió por seis meses la prescripción, pero luego de transcurridos

dichos seis meses y hasta la interposición de la demanda (16/08/2019) los períodos comenzaron a prescribir mes a mes.

En consecuencia, corresponde admitir la defensa de prescripción respecto a las diferencias salariales correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2016 y febrero de 2017 y rechazarla respecto del período que va desde marzo de 2017 a junio de 2018. Así lo declaro.

II.- Conforme lo prescribe el art. 265 inc. 6 del CPCC, supletorio, se analizará por separado cada concepto pretendido:

1. Indemnización por antigüedad y preaviso: el accionante tiene derecho al cobro de estos rubros, atento a lo considerado precedentemente sobre la justificación del despido indirecto decidido por su parte, y a lo dispuesto por los arts. 232, 245 y 246 LCT.

2. Días trabajados e integración mes de despido: respecto del reclamo en conceptos de haberes por los días trabajados (julio de 2018), corresponde receptar el presente, atento a que no se encuentra acreditado su pago.

En cuanto al rubro integración mes de despido, atento a la fecha en que se produjo el distracto, la cual no coincide con el último día del mes, corresponde receptar el reclamo de este concepto (cfr. art. 233 de la LCT). Así lo declaro.

3. SAC sobre preaviso y SAC sobre integración mes de despido: el actor tiene derecho a la percepción del rubro SAC s/ preaviso, conforme a la interpretación armónica de los arts. 121 y 232 de la LCT. La remuneración que se devenga durante el lapso del preaviso está compuesta por la que resulta del pago inmediato a la finalización de cada mes como por la de pago diferido a la finalización del semestre respectivo o sueldo anual complementario (CSJT, Sentencia N.º 840, de fecha 13/11/1998). La indemnización correspondiente deberá liquidarse conforme la siguiente doctrina legal de nuestro Máximo Tribunal Provincial: “La indemnización sustitutiva de preaviso se liquida computando la remuneración que hubiera correspondido al trabajador durante el lapso del preaviso omitido con más la proporción del sueldo anual complementario devengado”. (CSJT, sentencia nro. 223 de fecha 03/05/2011, in-re: “Serrano Víctor Oscar vs. Minera CodiConevial S.A. s/ Indemnización por despido”).

A su vez, resulta procedente el pago del SAC sobre la integración del mes de despido, cuando este último -como acontece en autos- no se produce el último día del mes, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 232 y 233 de la LCT.

4. Vacaciones proporcionales 2018: corresponde receptar este reclamo de acuerdo a lo previsto en el art. 156 de la LCT, atento a que no se encuentra acreditado su pago.

5. SAC proporcional 1er y proporcional 2do semestre de 2018: le asiste al trabajador el derecho a percibir estos conceptos atento a que no se encuentra acreditado su efectivo pago (cfr. art. 123 LCT). Así lo declaro.

6. Diferencias salariales de los últimos 24 meses: De acuerdo a lo resuelto anteriormente respecto al progreso parcial de la prescripción interpuesta por la accionada, se debe receptar este reclamo únicamente por el periodo comprendido entre marzo de 2017 y junio de 2018. Así lo declaro.

7. Multas arts. 8 al 15 de la ley 24.013: Cabe aclarar que, para la procedencia de la indemnización reclamada prevista en el art. 8 de la Ley 24.013,

deben cumplirse inexorablemente dos recaudos formales: 1) que el trabajador intime al empleador conforme el art. 11 de la ley 24013, lo que implica cumplir los recaudos de dicha norma, 2) que remita a la AFIP, no después de 24 horas hábiles, copia del requerimiento efectuado al empleador.

A su vez el art. 15 de la Ley 24.013 exige para su procedencia que se hubieran cursado las intimaciones previstas por el Art. 11 de dicha norma, y el despido se configurara dentro de los dos años de la mencionada intimación.

En tal sentido, surgiendo de las constancias de autos que el accionante no remitió copia de la intimación realizada a su empleador, no corresponden los rubros reclamados. Así lo dispongo.

9. Multa art. 1 de la ley 25.323: en relación al artículo 1° de la Ley 25323, cabe recordar que el mismo establece que la indemnización del artículo 245 de la LCT se incrementará al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

Encontrándose acreditada la existencia de la relación laboral sin registración al momento del despido, denunciada por el actor y negada por la demandada, se cumplen los extremos previstos en la citada norma. En consecuencia, corresponde receptar este reclamo. Así lo declaro.

10. Multa art. 2 de la ley 25.323: En autos, una vez extinguido el vínculo laboral el 30/07/2018 conforme fuera declarado, el trabajador intimó a la patronal, a fin de que proceda al pago de las indemnizaciones de ley, tal como se desprende de los telegramas obreros de fechas 16/08/18 y 30/07/19, con lo cual se encuentra cumplimentado lo dispuesto por la norma transcripta y por el art. 255 bis de la LCT, esto es, vencido el plazo previsto por el art. 128 (de cuatro días hábiles) contados desde la fecha de extinción de la relación laboral. Por lo expuesto, tiene derecho el demandante al concepto reclamado. Así lo declaro.

11. Multa del art. 80 de la LCT: de lo dispuesto por el art. 80 LCT en concordancia con lo establecido por el art. 3 del Dec. N.º 146/01 se sigue que, para justificar la procedencia de la sanción peticionada con fundamento en la citada normativa, se impone analizar si el trabajador observó el recaudo formal de intimar la entrega del certificado de trabajo en tiempo y forma y, eventualmente, si concurren en el caso los extremos propios de la figura (el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado o su cumplimiento defectuoso conforme lo establecido en el tercer párrafo del mencionado art. 80 de la LCT).

En tal sentido, surgiendo de las constancias de autos que el accionante no intimó a la demandada a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT, cumplido el plazo de 30 días otorgado al efecto (mediante telegrama del 30/07/19), corresponde receptar este rubro. Así lo declaro.

Además de ello, el actor solicitó se condene a la accionada a entregar certificación de servicios y certificado de trabajo, considero que habiendo sido reconocido el contrato de trabajo que vinculó a las partes, la empleadora deberá hacer entrega al accionante de certificación de servicios y certificado de trabajo (art. 80 de la LCT), haciéndose constar las reales condiciones laborales declaradas en la presente resolutive en dentro del plazo de diez días de quedar firme el presente fallo, bajo apercibimiento de aplicársele astreintes. Así lo declaro.

III.- Los rubros declarados procedentes deberán calcularse sobre la base de la mejor remuneración devengada por el actor de acuerdo a su categoría como “maestranza B”, según CCT 130/75, con fecha de ingreso en 15/11/11

y egreso en 30/07/18.

Cuarta cuestión: Intereses. Inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Costas. Planilla. Honorarios.

Intereses: I.- Los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago. Para su cómputo se aplicará la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones (sentencia N° 1422 de fecha 23/12/15) donde ratifica su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.N.A. y más recientemente, en la causa “Bravo José Armando vs. Los Pumas S.R.L. s/ Indemnizaciones” (sentencia n° 686 de fecha 01/06/17) en la que sostuvo: “En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago”.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT como Máximo Tribunal Provincial, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, y en función de lo previsto en el art. 768 CCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena se aplicará la tasa activa para descuento de documentos a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Así lo declaro.

Atento a ello, el planteo de la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 interpuesto por la accionante devienen en abstractos, por lo que estimo inoficioso pronunciarme al respecto.

II.- Ahora bien, el cálculo de los intereses en cada uno de los rubros declarados procedentes se computará del siguiente modo: los rubros 1, 2, 3 y 4 (ind. por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, SAC s/ preaviso, SAC s/ integración y vacaciones proporcionales) los intereses se computarán desde el día siguiente al cuarto día hábil contados desde las fechas en que se produjo el despido; en el caso del rubro 5 (SAC 1er semestre y proporcional 2do semestre de 2018) según lo normado por el art. 122 de la LCT se computarán de la siguiente manera: respecto del 1° semestre desde el día siguiente al 30/06/2018; respecto del 2° semestre 2018 desde el día siguiente al 30/07/18; respecto al rubro nro. 6 (diferencias salariales) los intereses correspondientes a cada período se computarán desde el día siguiente al cuarto día hábil desde que cada uno es debido; respecto a los rubros 9, 10 y 11 (multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y art. 80 de la LCT) se computarán intereses desde el día siguiente al vencimiento de dos días hábiles de la intimación realizada a los fines de su cumplimiento fehaciente y en el caso de la sanción del art. 80 de la LCT, se computarán intereses desde el día siguiente al vencimiento del plazo de dos días hábiles otorgado por la intimación realizada a los fines a su cumplimiento fehaciente; y, en el caso de las indemnizaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323, se computarán intereses desde el día siguiente al vencimiento de dos días hábiles de la intimación realizada a los fines de su cumplimiento fehaciente.

Una vez firme y ejecutoriada la presente, la demandada deberá abonar, dentro del plazo de diez días previsto por el Art. 145 del CPL, el monto que se establece en la condena con más sus intereses calculados sobre capital, con la tasa

establecida, desde la fecha consignada en la planilla de sentencia hasta su efectivo pago, tratándose de una deuda fácilmente liquidable. Ahora bien, si dejara vencer el plazo de 10 días, o no liquidará y abonará dentro de dicho plazo la totalidad de los intereses devengados sobre el capital, el monto de condena (comprensivo de capital más intereses) se capitalizará por única vez, por lo que deberá tomarse como base de cálculo para la actualización en los términos del Art. 770 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación.

Conforme lo meritado con anterioridad, se practica la siguiente planilla de capital e intereses:

Condori Juan Eladio - Jewells S.R.L.

Ingreso 15/11/2011
Egreso 30/07/2018
Antigüedad 6 años, 8 meses y 15 días
Categoría Maestranza B (CCT 130/75)

<u>Mejor remuneración mensual normal y habitual devengada -jul18</u>	\$	23.882,51
<u>1). Indemnización por antigüedad</u>	\$	167.177,56
\$ 23.882,51 x 7		
<u>2). Preaviso</u>	\$	47.765,02
\$ 23.882,51 x 2		
<u>3). SAC/ preaviso</u>	\$	3.980,42
\$ 47.765,02 / 12		
<u>4). Mes integrado jul-18</u>	\$	23.882,51
Días trabajados	\$	
	23	
	.	
	11	
	2,	
	10	
\$ 23.882,51	x	
	30	
	/	
	31	
Integración mes de despido	\$	
	77	
	0,	
	40	
\$ 23.882,51	x	
	1	
	/	
	31	
<u>5). SAC/ integración mes de despido</u>	\$	64,20
\$ 770,40 / 12		
<u>6). Vacaciones proporcionales 2018</u>	\$	11.597,08
\$ 23.882,51 x 12,14 / 25		

Ds. Vac. 12,14

Subtotal \$ al 30/07/2018		\$	254.466,79
Interés tasa activa Banco Nación al 30/11/2022	214,51%	\$	545.852,21
Subtotal \$ al 30/11/2022		\$	800.319,00

7). 1° SAC proporcional 2018		\$	1.990,21
\$ 23.882,51 / 2			
Proporción 16,67%			
Subtotal \$ al 30/07/2018		\$	1.990,21
Interés tasa activa Banco Nación al 30/11/2022	215,15%	\$	4.281,98
Subtotal \$ al 30/11/2022		\$	6.272,19

8). Indemnización art. 1 Ley 25.323		\$	167.177,56
\$ 167.177,56 x 100%			

9). Indemnización art. 2 Ley 25.323		\$	107.856,49
\$ 215.712,98 x 50%			

10). Multa art. 80 LCT		\$	71.647,53
\$ 23.882,51 x 3			

Subtotal \$ al 30/07/2018		\$	346.681,57
Interés tasa activa Banco Nación al 30/11/2022	215,25%	\$	746.241,22
Subtotal \$ al 30/11/2022		\$	1.092.922,79

Remuneraciones devengadas

	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Básico	\$ 13.710,01	\$ 15.005,44	\$ 15.005,44	\$ 15.005,44	\$ 16.505,98
Antigüedad	\$ 685,50	\$ 750,27	\$ 750,27	\$ 750,27	\$ 825,30
NR	\$ 1.295,43	\$ 1.500,54	\$ 1.500,54	\$ 1.500,54	\$ 1.500,54
Presentismo	\$ 1.307,58	\$ 1.438,02	\$ 1.438,02	\$ 1.438,02	\$ 1.569,32
Total	\$ 16.998,52	\$ 18.694,27	\$ 18.694,27	\$ 18.694,27	\$ 20.401,14

	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
Básico	\$ 16.505,98	\$ 16.505,98	\$ 16.505,98	\$ 18.006,52	\$ 18.006,52
Antigüedad	\$ 825,30	\$ 825,30	\$ 825,30	\$ 1.080,39	\$ 1.080,39
NR	\$ 1.500,54	\$ 1.500,54	\$ 1.500,54	\$ -	\$ -
Presentismo	\$ 1.569,32	\$ 1.569,32	\$ 1.569,32	\$ 1.590,58	\$ 1.590,58
Total	\$ 20.401,14	\$ 20.401,14	\$ 20.401,14	\$ 20.677,49	\$ 20.677,49

	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
Básico	\$ 18.306,63	\$ 18.606,74	\$ 18.906,84	\$ 20.797,54	\$ 20.797,54
Antigüedad	\$ 1.098,40	\$ 1.116,40	\$ 1.134,41	\$ 1.247,85	\$ 1.247,85
Presentismo	\$ 1.617,09	\$ 1.643,60	\$ 1.670,10	\$ 1.837,12	\$ 1.837,12
Total	\$ 21.022,11	\$ 21.366,74	\$ 21.711,35	\$ 23.882,51	\$ 23.882,51

	jun-18	jul-18
Básico	\$ 20.797,54	\$ 20.797,54
Antigüedad	\$ 1.247,85	\$ 1.247,85
Presentismo	\$ 1.837,12	\$ 1.837,12
Total	\$ 23.882,51	\$ 23.882,51

11). Diferencias salariales

Mes	Debió percibir	Percibió	Diferencia	% Tasa activa al 30/11/2022	\$ Intereses	Total \$ al 30/11/2022
mar-17	\$ 16.998,52	\$ 16.000,00	\$ 998,52	250,51%	\$ 2.501,38	\$ 3.499,90
abr-17	\$ 18.694,27	\$ 16.000,00	\$ 2.694,27	248,67%	\$ 6.699,82	\$ 9.394,09
may-17	\$ 18.694,27	\$ 16.000,00	\$ 2.694,27	246,50%	\$ 6.641,38	\$ 9.335,65

jun-17	\$ 18.694,27	\$ 16.000,00	\$ 2.694,27	244,53%	\$ 6.588,25	\$ 9.282,52
jul-17	\$ 20.401,14	\$ 16.000,00	\$ 4.401,14	242,49%	\$ 10.672,32	\$ 15.073,46
ago-17	\$ 20.401,14	\$ 16.000,00	\$ 4.401,14	240,45%	\$ 10.582,64	\$ 14.983,77
sep-17	\$ 20.401,14	\$ 16.000,00	\$ 4.401,14	238,55%	\$ 10.498,74	\$ 14.899,88
oct-17	\$ 20.401,14	\$ 16.000,00	\$ 4.401,14	236,41%	\$ 10.404,72	\$ 14.805,86
nov-17	\$ 20.677,49	\$ 16.000,00	\$ 4.677,49	234,27%	\$ 10.957,74	\$ 15.635,22
dic-17	\$ 20.677,49	\$ 16.000,00	\$ 4.677,49	232,12%	\$ 10.857,40	\$ 15.534,89
ene-18	\$ 21.022,11	\$ 16.000,00	\$ 5.022,11	229,68%	\$ 11.534,77	\$ 16.556,88
feb-18	\$ 21.366,74	\$ 16.000,00	\$ 5.366,74	227,61%	\$ 12.215,15	\$ 17.581,89
mar-18	\$ 21.711,35	\$ 16.000,00	\$ 5.711,35	225,39%	\$ 12.872,79	\$ 18.584,15
abr-18	\$ 23.882,51	\$ 16.000,00	\$ 7.882,51	223,08%	\$ 17.584,31	\$ 25.466,82
may-18	\$ 23.882,51	\$ 16.000,00	\$ 7.882,51	220,39%	\$ 17.372,37	\$ 25.254,88
jun-18	\$ 23.882,51	\$ 16.000,00	\$ 7.882,51	217,66%	\$ 17.156,74	\$ 25.039,25
1º SAC 2018	\$ 23.882,51	\$ 0,00	\$ 23.882,51	218,04%	\$ 52.074,35	\$ 75.956,86

Total diferencias	\$ 326.885,97
--------------------------	----------------------

Rubros 1) al 10)	\$ 1.899.513,98
Rubro 11) Diferencias salariales	\$ 326.885,97
Total condena al 30/11/2022	\$ 2.226.399,95

Costas: atento al progreso parcial de la demanda desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, las costas procesales se imponen en las siguientes proporciones: la demandada en autos deberá cargar con sus propias costas más el 80% de las devengadas por la parte actora, quien deberá soportar el 20% de las restantes propias, conforme al art. 63 del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial (ex. Art. 108 del CPCC), de aplicación supletoria.

Honorarios: corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. B del CPL.

Atento al resultado arribado en la litis, y a la naturaleza de esta, es de aplicación el art. 50 inc. A del CPL por lo que corresponde tener como base regulatoria el monto de la condena, que según planilla precedente resulta al 30/11/2022 en la suma de \$2.226.399,95.

Al tener presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito, lo dispuesto por los Arts. 12, 15, 38, 42 y concordantes de la Ley N.º 5.480, Art. 51 del CPL, Art. 1 de la Ley N.º 24.432 ratificada por ley provincial N.º 6715, regulo los honorarios de la siguiente manera:

1) A la letrada Vanesa Cristina Rasguido (MP 5672) por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderada del actor, en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de **\$483.129** (14% del capital de sentencia más el 55% por el doble carácter).

2) Al letrado Máximo Alberto Ibazeta (MP 4767), por sus actuaciones profesionales en el carácter de patrocinante de la accionada en una etapa del proceso de conocimiento (contestación de demanda), la suma de \$51.949 (7% del capital de sentencia /3 etapas). Por aplicación de lo normado por el artículo 38 in fine, Ley 5480, corresponde regular honorarios en la suma de **\$75.000** (valor de una consulta escrita).

3) Al letrado Matías Tomás Balardini (MP 6959) por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderado de la accionada en una etapa del proceso de conocimiento (producción de prueba), la suma de **\$80.521** (7% del

capital de sentencia /3 etapas, más el 55% por el doble carácter).

Por ello,

RESUELVO:

I.- Admitir parcialmente la excepción de prescripción interpuesta por la parte codemandada respecto a los rubros diferencias salariales respecto al periodo comprendido entre julio de 2016 a febrero de 2017, por lo considerado.

II.- Hacer lugar en forma parcial a la demanda promovida por **Juan Eladio Condori**, DNI nro. 33.702.900, con domicilio en calle 12 de Octubre, Colonia N.º 9, Departamento de Cruz Alta, en contra de Jewells SRL, CUIT nro. 30-69716687-0, con domicilio en calle Amadeo Jacques nro. 1.282 de esta ciudad. En consecuencia, se condena a esta última al pago de la suma total de **\$2.226.399,95** en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, días trabajados, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, vacaciones proporcionales no gozadas de 2018, SAC 1er semestre y proporcional 2do semestre de 2018, diferencias salariales por el periodo comprendido entre marzo de 2017 y julio de 2018, multas de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323 y multa del art. 80 de la LCT; la que deberá hacerse efectiva dentro de los diez días de ejecutoriada la presente.

A su vez, corresponde **absolver** a la firma accionada de las multas de los artículos 8 al 15 de la ley 24.013, de acuerdo a lo considerado.

III.- Intimar a la demandada para que dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia, haga entrega a Juan Eladio Condori del certificado de trabajo y la Certificación de Servicios y Remuneraciones (Art. 80 LCT) haciéndose constar en dicha documentación las verdaderas condiciones laborales del actor de conformidad a lo resuelto en la primera cuestión, bajo apercibimiento de aplicársele astreintes.

IV.- Costas: conforme lo considerado.

V.- Regular honorarios a: **a)** a la letrada **Vanessa Cristina Rasguido (MP 5672)**, por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderada de la parte actora, en la suma de **\$483.129**; **b)** al letrado **Máximo Alberto Ibazeta (MP 4767)**, por sus actuaciones profesionales en el carácter de patrocinante de la accionada, en la suma de **\$75.000**, y **c)** al letrado **Matías Tomás Balardini (MP 6959)**, por sus actuaciones profesionales en el carácter de apoderado de la accionada, en la suma de **\$80.521**; según lo considerado.

VI.- Planilla fiscal: Oportunamente, practicar y reponer (art. 13 ley 6204).

VII.- Comunicar a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

VIII.- Notificar a las partes en sus respectivos domicilios reales. A tal fin, acompañen las partes interesadas las movilidades correspondientes.

IX.- Comunicar a AFIP – DGI en la etapa de cumplimiento de sentencia de conformidad a lo prescripto por el art. 44 de la ley Nº 25.345.

Registrar, archivar y hacer saber. MM 1053/19

NRO.SENT: 748 - FECHA SENT: 30/12/2022

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=LOPEZ DOMINGUEZ Maria Carmen, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27253185029, Fecha:30/12/2022;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov>.

